

MEMORIAL

SR. JUEZ CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE LA Ila. nom.

**JUICIO: VILLARREAL NATALIO ADOLFO C. PONCE PEDRO LUIS
Y OTRA s. DAÑOS Y PERJUICIOS. Expte.:3041/08**

LOPEZ ELINA ADRIANA, abogada de la matrícula, por derecho propio, a VS con respeto digo:

En virtud de lo dispuesto por el art. 710 del CPCCT, presento en tiempo y forma, memorial del Recurso de apelación planteado en 25 de agosto de 2020 contra Resolución Interlocutoria, de fecha 12 de agosto de 2020, que deniega el planteo de Caducidad de Acción en la causa de la carátula.

ACLARACION PRELIMINAR

La cuestión controvertida gira en torno a la verificación o no en el expediente de la carátula, del instituto de caducidad de acción legislado por el **NCCYCN**, en sus arts. **2566 a 2572**.

Aunque el planteo se originó antes de la vigencia del texto legal, en virtud del art.7 CCYCN, igual al antiguo art. 3 C.C., es de aplicación en su integridad la normativa invocada en autos, por lo que encontrándose claramente legislada la solución del caso, no hay motivo para eludirla, y en esto la jurisprudencia es unívoca:

“La ley no es retroactiva cuando la aplicación de la nueva norma tan solo alcanza a los efectos en curso de una relación jurídica aún nacida bajo el imperio de la ley antigua. En consecuencia, no existe óbice para que una nueva ley sea de aplicación a los juicios pendientes”.C.N.Fed.Civ. y Com. Sala I , 1996/11/07, La Ley, 1997-D-858, etc)

A partir de esa base, este memorial tiene por objeto expresar los agravios que sostienen el recurso:

AGRAVIOS

1.- **El primer agravio** de este memorial radica en que el decisorio recurrido fue dictado en contradicción con la letra del art. **2569 inc. a del CCYCN**:

Art. 2569: Actos que impiden la caducidad:

a) El cumplimiento del acto previsto por la ley o por el acto jurídico.

En efecto, la resolución impugnada es confusa y lejos de aclarar la situación controvertida, complica la cabal comprensión de las circunstancias que deben fundar lógicamente la resolución en base a una interpretación contundente.

Claramente dice el artículo citado, que para que no se impida la caducidad de acción, deben cumplirse ciertos requisitos, por orden de la ley o de un acto jurídico. En este caso, no se han cumplido los requisitos que el decreto de fecha 4 de julio de 2007 impuso al actor para que no operara la caducidad impetrada en autos.

De tal modo que la declaración de caducidad surge ineludible, pues no consta en el expediente, el cumplimiento acabado de los requisitos que se impusieron para impedirla: 1- la solicitud y obtención del beneficio para litigar sin gastos, y 2.- que el mismo se obtenga en el plazo de 15 días hábiles.

1. Sobre el beneficio para litigar sin gastos: A fs. 282 consta el libramiento de los oficios, en fecha 24 de julio de 2007, pero los mismos no fueron diligenciados, y por tanto el beneficio no fue obtenido.
2. El plazo de caducidad de 15 días se cumplió ampliamente: conforme consta en cédulas de notificación que recibí en mi casillero de notificaciones, el apercibimiento de caducidad se notificó el 24 de julio de 2007 y la suspensión del trámite de la acción civil se notificó el 21 de agosto del mismo año. En ese lapso de tiempo se cumplió ampliamente el plazo de 15 días hábiles durante el cual se debía cumplir con la obtención del beneficio para litigar sin gastos, sin que ello se verificara en autos.

No encuentro razonable, sino más bien oscura la redacción de la resolución recurrida, que mezcla los plazos de 5 días para concretar la demanda, con los 15 días para obtener el beneficio para litigar sin gastos. Es este último el que no se cumplió, por lo que la presentación de la demanda se torna defectuosa, al no perfeccionar ni la representación ni las cargas tributarias iniciales o en su defecto la obtención de la carta de pobreza, a fin de que pueda correrse el traslado.

El texto del decreto en el que se basa el planteo de esta parte, impone indudablemente un plazo de caducidad de la acción civil, que verificado, produce los efectos del art. **2566 del CCYN**:

Extingue el derecho no ejercido.

2.- El 2do. agravio, lo configura el modo de contar los plazos que se manifiesta en la resolución recurrida, porque no toma en cuenta las fechas desde las que efectivamente producen efecto las decisiones en el proceso, que está dado por la notificación de las resoluciones: **(Art. 123 CPCC)**

La resolución de 04 de julio de 2007 fue notificada en casillero en 24 de julio de 2007, y la suspensión del trámite de acción civil se notificó el 22 de agosto de 2007. En ese lapso se cumplió el plazo de 15 días hábiles durante el cual se debía cumplir con la obtención del beneficio para litigar sin gastos, lo que no se verifica.

Por ello la sola mención de las resoluciones y las fojas, a los efectos de fundar la denegatoria, carece de efectos fundantes pues estas tienen efectividad a partir de la notificación. De esa forma, el plazo de los 15 días inhábiles se venció el 16 de agosto del año 2007, antes de la notificación en el casillero de la suspensión del trámite de la acción civil y los plazos que en ella corrían. Debe destacarse aquí que estos plazos nunca fueron expresamente reabiertos, pues se remitió el expediente al Juzgado que por turno corresponda a quien corresponde declarar el estado del expediente. Una vez firme la nueva radicación, plantee la Caducidad apercibida por el Juez delegante.

Dice la **Cámara Civil y Comercial Común Sala 2**

Sentencia 368 de 30/07/2013

Derudder Hnos. S.R.L. Vs, Acevedo Cesar Armando y otros S/ Daños y Perjuicios

.....Términos procesales suspendidos por decreto.....

“La suspensión del término no produjo sus efectos por el sólo dictado del decreto, en tanto era necesario la notificación personal del mismo. Ello así, por cuanto el auto que ordena la suspensión de términos procesales constituye uno de los casos taxativamente enumerados por nuestro digesto de forma como de notificación personal, por lo que la cédula resultaba en el caso absolutamente necesaria.....razones de seguridad jurídica y la preservación de la defensa en juicio aconsejan que la providencia que ordena la suspensión o reanudación del curso de términos procesales sea notificada personalmente (CCCC, Sala I, sentencia Nº 313, 26/11/1996, “Areana Carlos Vs. Viscido A., s/ Daños”)”
DRES:MOISA – AMENABAR.

Paralelamente el actor inició el juicio en un juez incompetente, porque la competencia se rige por el sorteo que recayó en el Juzgado de la 2da nom.

Este agravio sintetiza la más flagrante violación al debido proceso, y al derecho al juez natural, garantías de rango constitucional que no se respetan en esta causa. **Art. 18 CN.-**

Ahora bien, es importante destacar que el sorteo de juzgado en este juicio, ocurre después del traslado de la demanda del juicio 2566/07, y por ello me encontraba impedida de oponer en aquel todas las defensas que aquí invoco.

Por ello agregué como cuaderno de prueba en el juicio 2566/07 el planteo pendiente en el presente.

3º.- El 3er. Agravio lo configura el nihilismo procesal de la resolución, reflejado en la imperdonable incoherencia interna del resolutorio, que se funda en **no encontrarse abierta instancia alguna susceptible de perimir**, mientras que en el cuerpo del texto, se lee que “A fs.297/300, se cumple con este requisito y **se concreta la demanda**”, y que “a fs 305 obra informe

actuarial mediante el cual atento a los escritos presentados, se **suspende el trámite de la acción civil** hasta tanto se resuelva el pedido de suspensión del juicio...”

Si no existe instancia pendiente de perimir: ¿en que causa se decretó el apercibimiento de caducidad, se concretó la demanda y se suspendió el trámite de la acción civil? ¿Qué causa se remitió en más de 300 fs. al Juzgado que por turno corresponda?

El fundamento inconducente de la sentencia la voltea por su base, por su inconsistencia como construcción lógica, y por vulnerar los principios de fundamentación y congruencia que toda resolución debe tener.

Aún cuando se hubiere tratado del instituto de perención de instancia, error objeto del tercer agravio, el instituto al que se refiere la resolución tampoco sería aplicable en los términos que la misma usa, pues desde que se interpone una demanda, la instancia queda sujeta a los plazos de perención, **Art. 203 CPCCT: La instancia se abre con la promoción de la demanda...**,

La jurisprudencia local ha expresado: “Se entiende por instancia el conjunto de actos procesales que se suceden desde la interposición de la demanda, la promoción de un incidente o la concesión de un recurso, hasta el dictado de la sentencia.” DRES. SANTANA ALVARADO – AGUILAR DE LARRY.

Fundada la existencia de la instancia, es necesario completar la idea en un cuarto agravio:

4.- El cuarto agravio derivado del segundo, lo constituye el vicio de incongruencia en la resolución apelada, fundado en la confusión en que el sentenciante incurre al expresar que “no existe instancia susceptible de perimir”, pues lo que se reclama es la caducidad de acción y no perención de instancia, dos institutos totalmente distintos, incluso en su nomenclatura, aunque se llame caducidad también a la perención de instancia, son muy distintas: un instituto regulado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, mientras que la perención de instancia es materia del Código Procesal.

La diferencia fundamental la marca el art. **2566 del CCYCN, cuando dice: extingue el derecho**, mientras que la perención de instancia, después de declarada, admite volver a presentar la misma demanda, si la acción no está prescripta o caduca como en este caso. **Art- 209 CPCCT: EFECTOS DE LA CADUCIDAD: La caducidad de la instancia no extingue el derecho. Operada en primera instancia, deja sin efecto la relación procesal, pero no impide promover nuevamente la demanda.**

La letra del decreto del 04 de julio de 2007, es clarísima, habla de caducidad de acción y no de perención de instancia.

Las expresiones del sentenciante trasuntan una palmaria incongruencia pues se expide sobre una perención de instancia que no fue invocada por la presentante en su planteo.

La confusión obedece a que se toma textualmente la defensa equívoca del actor, que rechaza una perención de instancia que nunca se invocó y que a la presentante no favorece.

Mal puedo solicitar perención de instancia, pues estaría avalando el juicio iniciado por los mismos hechos, contra las mismas personas cuando ya se había producido la caducidad.

Como corolario, recordemos que la caducidad puede operar aún sin instancia iniciada, y así lo demuestran diversos ejemplos de caducidades del CCYCN, tales como los arts. 525 y 593.

La congruencia es una exigencia **del CPCCT, art.34**, y ha sido definida por la jurisprudencia local:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Civil y Penal

Sentencia: 625 Fecha: 22/06/2015

JURI JORGE ALFREDO Vs. HELPA S.R.L. Y OTROS S/RESOLUCION DE CONTRATO/INCUMPLIMIENTO

“No resulta ajustada a derecho la sentencia que infringe el principio de **congruencia** al condenar por un rubro que no fue reclamado”.
DRES.: GANDUR – ESTOFAN – POSSE.

Con lo expresado, queda al descubierto la violación del principio: **nemo potest ignorare leges** “nadie puede ignorar las leyes” y por tanto del

art. 8 CCYCN: “La *ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su incumplimiento*” y el

art. 3 del mismo ordenamiento: “*El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada.*”

5º Agravio. Agravia a esta parte la alarmante desigualdad de trato propiciada a las partes.

Una breve reseña demostrara tal afirmación: El hecho usado para fundar la resolución apelada en este juicio, fue usado de manera inversa en el juicio gemelo entre las mismas partes N° 2566/08, que tramita ante el Juzgado CCC 8va.nom: La falta de traslado de la demanda en este expediente, al no estar yo notificada, impedía que pudiese invocar en el otro juicio, la caducidad invocada aquí, pero si admitía que interpusiera excepción de prescripción de la acción en el mismo.

Párrafo aparte merece la desestimación “*contra legem*” que mereció la defensa de prescripción en el juicio 2566/07, que desatendió el mandato del **segundo párrafo del art. 2547 CCYCN**, donde se dispone:

La interrupción del curso de la prescripción se tiene por no sucedida si se desiste del proceso o caduca la instancia.

Es notorio el desistimiento del derecho en este juicio, cuya demanda se tiene como interruptiva en la sentencia del 2566/07, pues

en lugar de completar los requisitos para la concreción de la misma y correr su traslado, el actor comienza un juicio distinto, y eso configura desistimiento del proceso, causal de cese de los efectos interruptivos de la demanda defectuosa.

Solicito a SS que atienda con especial énfasis este punto del reclamo porque es uno de los defectos de que adolecen las dos sentencias del juicio Nº 2566/07 cuya acumulación se solicita. El decisorio recurrido por ello, padece de una grave arbitrariedad que afecta la igualdad debida a las partes, pues mientras en las sentencias del juicio 2566/07 la demanda civil en el juicio penal, es decir la que obra en este expediente, es considerada interruptiva de la prescripción, en la resolución recurrida en el de marras, tal demanda no existe. Tamaña incoherencia debe corregirse mediante la acumulación de los procesos y allí se verá que las sentencias son contradictorias en este aspecto, lo que viene a justificar la unificación.

Resuelta la caducidad impetrada, el juicio Numero 2566/08 entre las mismas partes debe ser declarado nulo por ser posterior, y en la misma sentencia al unificarse los expedientes. En defecto de esa nulidad, correspondería declarar eliminados los efectos interruptivos de la demanda en el presente, si se confirma que la misma no existe porque fue desistida. De cualquier modo el segundo juicio no es procedente: o por caducidad de acción en el presente, o por prescripción en el segundo por el desistimiento del más antiguo. **(Art. 2570 CCYCN)**

La extrema permisividad de los dos Juzgados actuantes con el actor, se torna desconcertante, por tratarse la prescripción y la caducidad de institutos claramente regulados por el CCYCN. Tal actitud, debe reverse y este es el momento para rectificar el rumbo de la causa unificando los expedientes para declarar las nulidades que se tornan indudables.

De admitirse este agravio, la declaración de caducidad anularía los errores de los decisorios del segundo juicio que contradigan el decisorio perseguido por esta presentación.

Para que este agravio sea procedente, en su totalidad, se impone la acumulación de los autos.

6º Agravio: Se agravia esta parte por el absoluto desconocimiento por el Juzgado del derecho aplicable, esto es el instituto reglado entre los arts. 2566 y 2572 del CCYCN.

Lino Palacios, citando a GUASP, define la “acción”: “es el poder de provocar la actividad de los Tribunales, supuesto de la actividad procesal, pero previo a la misma y fuera por ello del mundo del proceso”.(Cit. *Derecho Procesal Civil, TI, 1986, pág. 118*).

Y la “caducidad de acción”, definida por Jorge J Llambías, “es un modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de los particulares.”(Cit, *Derecho Civil, TII, 1980, Pág 699*)

Habiendo ya fundado la aplicación del CCYCN, el cumplimiento de los requisitos para declararla y los efectos de la caducidad

de acción, del art. 2566, sólo resta expresar la interpretación correcta que de los actos procesales cumplidos en la causa corresponde:

El decreto de **04 de julio de 2007**, impuso al actor, además de concretar la demanda, cumplir con las cargas impositivas o de lo contrario solicitar y obtener el beneficio de litigar sin gastos, en el plazo de 15 días hábiles, todo bajo pena de caducidad de la acción civil.....

Operada la caducidad, con lo cual se extingue el derecho, ninguna nueva demanda podía revivir la acción, pues extinto el derecho no puede resucitar con una nueva demanda, y es lo que surge del art. 2566.

Parece ser este el efecto buscado por el actor en el juicio 2566/07, iniciado después de cumplidos los 15 días hábiles otorgados por el Juzgado.

El desplazamiento posterior del expediente tampoco produce el efecto de revivir la acción extinguida, porque es un instituto indisponible, y sus plazos no se suspenden ni interrumpen; el decreto de 4 de julio no fue recurrido, esto es quedó firme, y la expresión de que la causa se remitía al Juzgado competente, no impide que la caducidad se declare en el estado al que arribó por inactividad del actor: esto es se ha cumplido el plazo impuesto. No había sido declarado porque el *trámite de la acción civil* se suspendió y eso impidió interponer la caducidad de la misma, para lo cual no existe ningún plazo, sino sólo el requisito de no haber consentido la pérdida del derecho y que se interponga en juzgado competente, recaudo que fue diferido al Juzgado Civil de turno, esto es quedaba supeditado al sorteo, que recayó en el Juzgado de la 2da. nom. y no en el de la 8va. nom. Es decir que además de iniciar un juicio sin acción, el actor lo hizo ante un **juzgado incompetente**.

La gravedad de las cuestiones suscitadas exige un análisis extenso de las irregularidades que se han plasmado en el proceso, y por ello, sólo agrego, que la inconsistencia de la demanda presentada para dar por cumplido el requisito de concretarla, se funda en la inexistencia de la representación invocada en la misma, por no cumplir con el trámite del beneficio para litigar sin gastos, que actúa como mandato.

Es la figura de la representación o mandato judicial que no se configura en el caso, y por ello el plazo de caducidad se cumple ampliamente. La figura del mandato y sus disposiciones son de orden público.

Desconoce la resolución, de fecha 12 de agosto de 2020, lo normado por el

Art. 2567 CCYCN: *“Los términos de caducidad no se suspenden ni se interrumpen, salvo disposición legal en contrario”.*

Es en virtud de este artículo que la remisión del expediente no revive la acción caduca.

SOLICITO ACUMULACION

En virtud de los agravios que anteceden, detallando los hechos que fundan la petición de acumulación de procesos, considero pertinente que:

En virtud del art. 174 INC 1.- CPCCT, corresponde se acumule el presente juicio al existente entre las mismas partes, con iguales objeto y causa, que tramita ante la Excm. Cámara Civil y Comercial Sala III.: VILLARREAL NATALIO ADOLFO C. PONCE PEDRO LUIS Y OTRA S. DAÑOS Y PERJUICIOS, Expte.: Nº 2566/07. Asimismo en virtud de los arts. **176 y 177 CPCCT**, corresponde se haga conocer del pedido al juez que entiende en el juicio posterior.

Para confirmar la fecha de presentación, será menester un pedido de informe de mesa de entradas sobre el ingreso del juicio que se debe unificar, ya indicado en el párrafo ut-supra.

Destinados estos agravios a la Cámara Civil y Comercial Común, no sería inconducente pedir a S.E. que tomase contacto con el expediente Nº 2566/07 entre las mismas partes para corroborar que se tratan de los mismos objeto, sujetos y causa, circunstancia que encuadra dentro de los motivos para acumular los autos hasta encontrarse en igual estado procesal y luego unificar el decisorio en una sola sentencia, al tratarse de idéntica causa, con lo que la solución definitiva cuestionada en el juicio ante la VIIIa. Nom. Civil y Comercial se evidenciará fraudulenta.

El sorteo de Juzgado para entender en el pleito se hizo en este juicio, sin embargo, desatendiendo tales mandas judiciales, el abogado del actor comienza el segundo juicio civil, al advertir la caducidad de acción que se había operado en el presente y que decretada le hubiera impedido iniciar el segundo.

PETITORIO

Por lo expuesto solicito:

- 1.- Se tenga por presentado en tiempo y forma memorial de agravios en el recurso concedido.
- 2.- Se libre oficio a mesa de entradas para que informen fecha de ingreso y última radicación de los autos: VILLARREAL NATALIO ADOLFO C. PONCE PEDRO LUIS Y OTRA S. DAÑOS Y PERJUICIOS EXPTE. 2566/07- ante el Juzgado CYCC 8va, nom.
- 3.- Se decrete la acumulación de los autos de la misma carátula Nº: 2566/07, que se encuentra en estado de control de recurso de casación ante la Sala III de la Excm. Cámara CYCC., librándose oficio para su remisión desde donde se encuentre.

4. -Se haga lugar a este recurso, decretándose la nulidad de lo actuado en el expediente 2566/07, luego de notificado en el mismo el presente planteo de caducidad de acción.

SERA JUSTICIA.



Elina Adriana López

Abogada – MP.3467

PODER JUDICIAL DE TUCUMAN



93AWQFBU

CEDULA DE NOTIFICACION

JUZGADO CORRECCIONAL SEGUNDA NOMINACION

CEDULA N°551

En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, 20 de agosto de 2008.-

Expte N°: 9253/2004.-

Causa: PONCE PEDRO LUIS S/ LESIONES CULPOSAS (NATALIO ADOLFO VILLARREAL).-.

Se notifica a: ELINA ADRIANA LOPEZ (3° CIVIL DEMANDADO)

Domicilio: CASILLERO DE NOTIFICACIONES N° 749 EL SIGUIENTE:

PROVEIDO

San Miguel de Tucumán, 11 de agosto de 2008.- **AUTOS: Y VISTO:Y CONSIDERANDO: RESUELVO:** I- **HACER LUGAR A LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA** solicitado por el imputado LUIS PEDRO PONCE, D.N.I. n° 12.387.478, Prio. Pol. n° 932.678, por el término de **QUINCE (15) MESES** (Arts. 27 bis, 76 bis, ter, cuater y 94 del C. Penal). II- **DISPONER** que durante el plazo de **QUINCE Meses** el imputado PONCE, cumpla con las siguientes reglas de conductas, bajo apercibimiento de ley, en caso de incumplimiento de todas o de cada una de las mismas: 1) **Fijar** residencia y cualquier modificación de la misma, aún temporaria, deberá ser previamente comunicada al Tribunal, salvo casos de urgencia, lo que se deberá acreditar debidamente; 2) **Abstenerse** de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; 3) **Realizar la donación de Setenta y Cinco Pesos (\$75) mensuales a la Fundación Ayuda al Niño Necesitado sito en calle Las Heras N° 51 de esta Ciudad, por el término de Quince Meses**, debiendo las autoridades de dicha Institución informar en forma mensual, sobre el cumplimiento de lo antes dispuesto por parte del encartado, destacándose cualquier información de relevancia, al respecto. 4) Realizar el curso de Manejo y Educación Vial dictado por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad San Miguel de Tucumán, el que deberá aprobar, debiendo presentar consancia respectiva, firmada por autoridad competente que así lo acredite. **III) NO IMPONER** al Imputado Ponce, el pago de **RESARCIMIENTO ECONOMICO**, a la víctima, conforme lo considerado, quedando expedita vía civil. **IV) IMPONER** el pago de multa de **Pesos Un Mil**, establecida en los arts. 76 y 94 del Código Penal, la que será abonada en Diez **(10) cuotas** mensuales y consecutivas de **Pesos Cien (\$100)**, cada una, hasta cubrir el monto total de **Pesos Mil**, bajo apercibimiento de caducidad de la suspensión del juicio a prueba, dispuesta en este decisorio, las que deberán ser depositadas en el Banco del Tucumán Sucursal Tribunales, a nombre de este Juzgado y para estos actuados, debiéndose acompañar boleta de depósito, dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes. **V) ORDENAR** la remisión de la causa al Juzgado Civil y Comercial Común que por turno corresponda, disponiéndose la previa formación de incidente para el control de cumplimiento de la probation otorgada. **VI) COSTAS**, como se encuentran consideradas, todas a cargo del imputado Luis Pedro Ponce. Arts. 550, 551 del C.P.P. **VII) RESERVAR** pronunciamiento de honorarios profesionales para su oportunidad.- (Ley 5480 y cc.).-**PROTOCOLICÉSE, NOTIFIQUESE Y HAGASE SABER.-** Fdo. DR. VICTOR MANUEL ROUGES - JUEZ.- **QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.**---1871/2002 MAM



SECRETARIO

Dra. MARIA FERNANDA BARRER de RAMASCU PARRA
SECRETARIA JUDICIAL CA 7 P
DELEGADO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NAC.

M.E. N° Recibido Hoy
Para su cumplimiento pase al Oficial

Notificador Sr.

Secretario Jefe

A horas 13 del día 22 AGO 2008 Se dejó cédula en la casilla
número 248 y se devolvió el original a Secretaría de origen.-



Oficial Notificador

758

PODER JUDICIAL DE TUCUMAN



93JSKXPU

CEDULA DE NOTIFICACION

JUZGADO CORRECCIONAL SEGUNDA NOMINACION

CEDULA N°290

San Miguel de Tucumán, 4 de julio de 2007.-

Expte N°: 9253/2004.-

Causa: PONCE PEDRO LUIS S/ LESIONES CULPOSAS (NATALIO ADOLFO VILLARREAL).-.

Se notifica a: DANIEL EDGARDO MOEREMANS (Querellante y Actor Civil)

Domicilio: Casillero de Notificaciones n°1032

PROVEIDO

"SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 4 de julio de 2007.- Cítese a la Sra. Fiscal Correccional de la 1a. Nominacion, Dra. Maria Elisa Molina, al imputado y demandado civil PEDRO LUIS PONCE, a su letrada defensora, Dr. SILVIA SUSANA MOYANO, a la citada en garantía LIDERAR CIA. GRAL. DE SEGUROS S.A., al querellante y actor civil NATALIO ADOLFO VILLARREAL, y a la 3a. civil demandada ELINA ADRIANA LOPEZ, a los efectos que en el término común de CINCO días, comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, documentos, cosas secuestradas é interpongan las recusaciones que estimen pertinentes. En igual término, emplácese al Actor Civil NATALIO ADOLFO VILLARREAL a los fines de que concrete su demanda, debiendo darse cumplimiento con lo establecido expresamente por el art. 99 de la Ley Tributaria, o en su caso, presentar Beneficio para Litigar sin Gastos, otorgándose el termino de 15 DIAS HABILES a partir de la presente notificación para la tramitación y obtención de dicho beneficio (Ley N°6314, art.4 C.P.P. y arts.261 y cc. del C.P.C.), bajo pena de caducidad de la acción civil dentro de este proceso Penal (Art.361 del C. de P. P.) Notifíquese y líbrense los oficios de Ley.-" Fdo. DR. VICTOR MANUEL ROUGES - JUEZ - QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

24 JUL 2007
M.E. N° Recibido Hoy
Para su cumplimiento pase al Oficial Notificador. Sr:

24 JUL 2007
A horas 17 del día Se dejo cédula en la casilla número 1032 y se devolvió el original a Secretaría de origen.-



SECRETARIO

Secretario Jefe

Oficial Notificador

SECRETARIA CAT. 1701
MESA DE ENTRADA CIVIL